

SENTENCIA.- Guanajuato, Guanajuato, a veinticuatro de mayo de dos mil doce.

V I S T O para resolver el recurso de revisión electoral número 04/2012-IV, interpuesto por el licenciado Mario Alonso Gallaga Porras, en su carácter de representante del **Partido Acción Nacional** en el Estado de Guanajuato, en contra del acuerdo CG/054/2012 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el día treinta de abril del año en curso, mediante el cual se declaró procedente el registro de la coalición formada por los partidos políticos **Revolucionario Institucional** y **Verde Ecologista de México** para postular candidatos a diputados del Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa en los distritos III, IV, V, VI, VII, XV y XVI del Estado de Guanajuato, en las elecciones constitucionales de este año.

R E S U L T A N D O

PRIMERO.- El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y el propio Código realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos con la finalidad de renovar a los integrantes del Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como a los Ayuntamientos, según se desprende del numeral 173 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Atento al artículo 174 del ordenamiento electoral referido, se deriva que para los fines indicados, de renovación de los poderes públicos, el proceso electoral se divide en tres etapas: I.- Preparación de la elección, II.- Jornada electoral y III.- Resultados y declaración de validez de las elecciones.

El procedimiento que nos ocupa, se relaciona con la primera etapa identificada como "*preparación de la elección*", prevista en el Capítulo Segundo, Título Segundo, Libro Cuarto

del Código Electoral.

SEGUNDO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión de fecha treinta de abril de este año, aprobó el acuerdo número CG/054/2012 relativo al registro del convenio de coalición suscrito por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, para postular candidatos a diputados del Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa en los distritos III, IV, V, VI, VII, XV y XVI del Estado de Guanajuato, en las elecciones constitucionales de este año que habrán de celebrarse el día primero de julio del año en curso.

Inconforme con el otorgamiento del registro de la coalición formada por los referidos partidos políticos, para contender en las elecciones de los distritos III, IV, V, VI, VII, XV y XVI, todos del Estado de Guanajuato, el Partido Acción Nacional por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, interpuso el cinco de mayo del presente año, recurso de revisión contra la aprobación del citado acuerdo CG/054/2012.

TERCERO.- Por razón de turno, correspondió conocer a esta Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato del recurso planteado, por lo que mediante proveído de fecha nueve de los corrientes se radicó el asunto, bajo el número 04/2012-IV.

En ese proveído, se ordenó citar a los terceros interesados, acudiendo al efecto los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México por conducto de sus representantes, quienes a su vez se ostentaron como representantes de la coalición, a efecto de expresar alegatos, aportar pruebas y señalar domicilio procesal para oír y recibir notificaciones dentro del presente asunto.

La autoridad responsable, Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, fue omisa en contestar los agravios expresados por el partido político impugnante, limitándose a cumplir con el requerimiento impuesto.

CUARTO.- Habiendo concluido la instrucción del presente asunto, con el traslado a los terceros interesados y aportadas las pruebas del recurrente, se procede a dictar la resolución correspondiente, en los términos que a continuación se detallan, de conformidad con lo establecido por el numeral 301 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Esta Segunda Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 298 fracción VII, 300 y 335 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato; así como 21 fracción III y 86 del Reglamento Interior del Tribunal Estatal del Estado de Guanajuato.

SEGUNDO.- Previo a hacer el análisis correspondiente del recurso que nos ocupa, en primer término se estudiará la personalidad del recurrente, en virtud de que se trata de un presupuesto procesal.

La personería del que suscribe el recurso, ciudadano licenciado Mario Alonso Gallaga Porras, como representante del **Partido Acción Nacional** en el Estado de Guanajuato, se encuentra demostrada con la certificación de fecha treinta de abril de dos mil doce, expedida por el licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yañez, en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de

Guanajuato, de la que se deriva la referida acreditación; documental que merece valor probatorio pleno de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 287 penúltimo párrafo 318 fracción III y 320 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, por tratarse de una documental pública.

Es menester precisar, que no constituye obstáculo alguno para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que el recurrente formalmente lo sea el representante propietario del Partido Acción Nacional, en virtud de que nuestra Legislación Electoral establece en su artículo 311, que son partes en los recursos, entre otros, el Partido Político promovente, actuando por conducto de sus representantes legales; de tal suerte que resulta aplicable el principio de derecho que establece que donde la ley no distingue, el intérprete no debe distinguir; por ende, debe aceptarse que cualquiera que tenga la representación de un partido político conforme a sus estatutos, puede actuar en su representación en los procesos que las leyes les autoricen para hacer valer sus derechos.

Así lo ha establecido la tesis S3EL 042/2004 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 903-904, que a la letra expresa:

REPRESENTANTES DE PARTIDO. PUEDEN IMPUGNAR INDISTINTAMENTE ACTOS Y RESOLUCIONES DE UN CONSEJO DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL, AUNQUE ESTÉN REGISTRADOS ANTE OTRO (Legislación de Guanajuato y similares).—De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 51, 52, 58, 59, 60, 134, 135, 139, 140, 147, 148, 149, 153, 168, 268, 287 y 311 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato se obtiene, en primer término, que cada órgano electoral, llámese Consejo General, Distrital o Municipal, tiene su propio ámbito de competencia, dentro del cual ejercen

las funciones que la propia ley les confiere; así como que cada uno de estos órganos se integra por su propio conjunto de elementos personales, distintos entre sí, pero con idéntica o similar denominación, tal es el caso de los presidentes, secretarios, consejeros ciudadanos y representantes de los partidos políticos. Sin embargo, la mecánica apuntada en los citados dispositivos, no impide que los representantes partidistas puedan actuar indistintamente dentro del ámbito de competencia que es propio de diverso Consejo del cual directa e inmediatamente dependan y ante quien estén debidamente acreditados, en la medida en que el artículo 286 del citado código, dispone que los partidos políticos por intermedio de su representante estatal, distrital o municipal legalmente acreditado ante los organismos electorales, contarán en los términos señalados por esa codificación con diversos recursos electorales, entre ellos, los de revisión y apelación; norma que debe entenderse de manera amplia y no constreñida a los mecanismos previamente establecidos para la designación de representantes de partido ante los distintos órganos electorales, pues de haberse querido hacer patente un ejercicio de facultades correlacionado, esto es, tendente a que el representante acreditado ante determinado órgano electoral solamente pueda promover recursos contra actos o resoluciones emitidas por este órgano en específico, bastaría la simple aseveración de ello en el dispositivo analizado o la limitante tajante en ese sentido, y en tanto que no fue redactado en esos términos tal precepto legal, es preciso respetar el atinado axioma jurídico que refiere: Donde la ley no distingue, no compete al juzgador distinguir, que trae, por consecuencia, la factibilidad de considerar que de manera indistinta un representante de partido político, ante un determinado consejo, puede promover recursos en contra de actos emitidos por otro, y no constreñirlo a que la impugnación del acto de alguno de dichos órganos electorales, sea facultad exclusiva del representante acreditado ante ese propio órgano.

TERCERO.- En observancia a lo dispuesto en el artículo primero del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, que especifica que sus disposiciones son de orden público y de observancia general, y considerando que para la procedencia de todo medio de impugnación es presupuesto procesal la inexistencia de causas de sobreseimiento, previstas en el artículo 326 de ese mismo ordenamiento, deben estudiarse de manera previa al fondo de recurso, incluso de oficio, es decir, con independencia de que fueran invocadas o no por las partes.

Los requisitos mínimos que resultan fundamentales para el estudio de la impugnación planteada, señalados por el numeral 287 del Código Electoral del Estado, fueron satisfechos por el promovente al interponer su escrito de inconformidad, donde consta el nombre, domicilio y firma de quien promueve en representación del Partido Acción Nacional, identificando además, el acto impugnado; la autoridad responsable; se mencionan los antecedentes y hechos materia de la impugnación; se expresan agravios y los preceptos legales que se estiman violados; el nombre y domicilio de los terceros interesados ofreciéndose también pruebas de su intención.

En lo relativo a la inexistencia de causas de sobreseimiento, previstas en el artículo 326 del ordenamiento electoral invocado, analizadas en el orden de su previsión legal, se desprende lo siguiente:

I.- La primera causal establecida en el último precepto invocado no se actualiza, ya que de las actuaciones existentes en autos, no se aprecia que el recurrente se haya desistido expresamente del recurso interpuesto.

II.- No se advierte que se haya demostrado la inexistencia del acto reclamado, ya que por el contrario, el impugnante cuestiona el contenido del acuerdo CG/054/2012, adoptado en la sesión celebrada el treinta de abril de dos mil doce, por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en lo relativo a la aprobación del registro de la coalición formada por los partidos políticos ya mencionados, para postular candidatos a diputados del Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa en los distritos III, IV, V, VI, VII, XV y XVI del Estado de Guanajuato, en las elecciones constitucionales de este año, a celebrarse el próximo primero de julio del año que transcurre; cuya copia certificada obra en

el expediente; documental que amerita valor probatorio pleno en los términos de los artículos 318 fracción II y 320 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato.

III.- No existe probanza que acredite que las causas que se invocan como generadoras de la impugnación hayan desaparecido, de tal manera que hayan dejado el recurso sin materia, pues en el caso concreto no se presentan actos de convalidación o de rectificación posteriores a su presentación, en razón de lo cual no se actualiza la fracción III del 326 de la ley comicial de nuestro Estado.

IV.- Respecto a las causales de improcedencia que recoge el citado numeral 326 del código comicial en cita, en su fracción IV, al remitirnos al artículo 325 del mismo ordenamiento, se puntualiza:

A.- La causal contenida en la fracción I del mencionado artículo 325, consistente en que el recurso de revisión no sea firmado por el promovente, debe decirse que este supuesto no se actualiza en la especie, pues como quedó establecido en la primera parte del presente considerando, del escrito que contiene el recurso de revisión en estudio, se advierte que se encuentra suscrito en forma autógrafa por el licenciado Mario Alonso Gallaga Porras como representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

B.- Por lo que hace a la fracción II, no se desprende de las constancias que obran en autos que exista aceptación expresa o tácita de los actos materia de impugnación, ya que por el contrario, el impugnante cuestiona el contenido del acuerdo CG/054/2012 emitido por la autoridad responsable de fecha treinta de abril del dos mil doce, cuya copia certificada obra en el expediente, que contiene, entre otras actuaciones,

la aprobación del registro de la coalición conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, para postular candidatos a diputados del Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa en los distritos III, IV, V, VI, VII, XV y XVI del Estado de Guanajuato, a fin de contender en las elecciones del primero de julio del año que transcurre; documental cuyo valor probatorio ya fue calificado de pleno en supralíneas.

C.- Respecto a la causal de improcedencia formulada por Carlos Torres Ramírez, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato con la personalidad reconocida en el auto dictado el trece de mayo de dos mil doce, se indica lo siguiente: - - - -

Es necesario acotar que aunque esta persona acudió al juicio ostentándose como representante legal de la coalición formada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, lo hizo, respecto de los municipios citados en el convenio de coalición (sic), sin embargo la coalición cuestionada es para postular candidatos a diputados del Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa en los distritos III, IV, V, VI, VII, XV y XVI del Estado de Guanajuato, en las elecciones constitucionales de este año, lo que denota la falta de justificación de personalidad, pues no sólo afirmó en el proemio del escrito tal personalidad, sino que pretendió justificarla con la certificación expedida por el licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yañez, en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de la que se deriva la referida acreditación de representante legal de la coalición para postulara **candidatos en 29 ayuntamientos**, documental que merece valor probatorio pleno de acuerdo a

lo dispuesto por los artículos 287 penúltimo párrafo 318 fracción III y 320 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, por tratarse de una documental pública.

En conclusión, del documento solo demuestra su representación de la coalición formado por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, pero para postular candidatos en 29 Ayuntamientos y no candidatos a diputados del Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa en los distritos III, IV, V, VI, VII, XV y XVI del Estado de Guanajuato, por lo que desde esa perspectiva el documento adjuntado a su promoción no justifica su personalidad.

Sin embargo, no obstante que el tercero interesado no justificó su personalidad, no puede desconocerse que de los documentos remitidos por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se desprende que de la cláusula sexta del convenio de coalición entre los partidos citados, se infiere que el ocurso fue nombrado representante legal, por lo que debe tenerse subsanado dicho nombramiento y por reconocida su personalidad.

Ahora, entrando en materia, el Partido Revolucionario Institucional y la coalición tercera interesada, por conducto del Doctor Carlos Torres Ramírez, sostiene que el partido político recurrente no tiene interés jurídico para recurrir el acuerdo CG/054/2012 mediante el cual se declaró procedente el registro del convenio de coalición, ya que desde su perspectiva, el acto que se impugna no afecta la esfera jurídica de aquél, debido a que el inconforme no tiene facultades de cuestionar el convenio de coalición aduciendo que no se ajustó el mismo a términos estatutarios.

Como sustento de su intención de sobreseimiento, invocó la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la Gaceta Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Órgano de difusión de los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 1, número 1, 2008, páginas 62 y 63, que dice:

CONVENIO DE COALICIÓN. NO PUEDE SER IMPUGNADO POR UN PARTIDO POLÍTICO DIVERSO, POR VIOLACIÓN A LAS NORMAS INTERNAS DE UNO DE LOS COALIGADOS.

El convenio de coalición celebrado por dos o más partidos políticos no puede ser impugnado por uno diverso a los coaligados, si se invoca como razón de la demanda la infracción a una norma interna de alguno de los partidos políticos coaligados, toda vez que la invocada infracción, fundada o infundada, no afecta en modo alguno los derechos o prerrogativas del demandante, el cual carece de interés jurídico para impugnar, derecho que únicamente corresponde a los militantes y a los órganos del partido político afectado por la invocada infracción a la mencionada norma estatutaria o reglamentaria. Por tanto, la impugnación presentada por un partido político diverso deviene notoriamente improcedente, por falta de interés jurídico, conforme a lo dispuesto en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral”.

Empero, la jurisprudencia invocada no cobra aplicación cabal y plenamente al caso particular, en virtud de que los agravios expresados se enderezan a combatir no solo violaciones estatutarias de los partidos políticos, sino también el incumplimiento a los requisitos legales atinentes al régimen de coaliciones, invocándose además la vulneración a normas de orden público.

En efecto, el partido político disidente hace valer la violación a la fracción I del artículo 36 del Código Electoral del Estado ya que, desde su perspectiva, los partidos políticos coaligados no exhibieron ante la autoridad responsable las actas que acreditaran que sus órganos partidistas competentes aprobaron, de conformidad con sus estatutos, la firma del convenio.

De este modo, sin que se desconozca que el impetrante también atañe trasgresiones a las normas estatutarias al conformarse el convenio de coalición, tal situación de modo alguno es suficiente para desechar de plano el recurso interpuesto, pues como ya se indicó, en el pliego impugnativo no sólo se incrimina la transgresión a procesos y preceptos estatutarios, sino también se imputa violación a los requisitos legales que debe cumplir la coalición para su registro ante el Instituto Electoral del Estado.

Máxime, la limitación que se impone a un partido político de impugnar el registro de un convenio de coalición signado por otros institutos políticos, no es aplicable cuando se aduzca transgresión a requisitos legales que debe cumplir la coalición para su registro, como en el caso acontece.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 2011, página 29, que literalmente indica:

CONVENIO DE COALICIÓN. PUEDE SER IMPUGNADO POR UN PARTIDO POLÍTICO DISTINTO A LOS SIGNANTES CUANDO SE ADUZCA INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES PARA SU REGISTRO.—*La Sala Superior ha establecido la jurisprudencia 31/2010 de rubro: CONVENIO DE COALICIÓN. NO PUEDE SER IMPUGNADO POR UN PARTIDO POLÍTICO DIVERSO, POR VIOLACIÓN A LAS NORMAS INTERNAS DE UNO DE LOS COALIGADOS, conforme a la cual un convenio de coalición no puede ser controvertido por un partido político distinto a los signantes, cuando la inconformidad se sustenta en violación a disposiciones estatutarias. Sin embargo, tal limitación en forma alguna puede regir cuando se aduzca transgresión a los requisitos legales que debe cumplir la coalición para su registro, en cuyo caso, cualquier partido político cuenta con interés jurídico para impugnar ese acto de autoridad, dado que tiene la calidad de entidad de interés público.*

A este respecto cabe apuntar que la Sala Superior ha establecido los siguientes criterios:

1.- La limitación de un partido político para impugnar actos de otro partido que violen normas estatutarias, en modo

alguno pueden regir cuando la transgresión tenga que ver con los requisitos legales que deben cumplir para registrar una coalición.

2.- Que los partidos políticos pueden deducir acciones tuitivas de intereses difusos contra los actos de preparación de las elecciones, por lo que partiendo de que el registro de candidatos de los partidos en lo individual o en coalición, es un acto de preparación de la elección del próximo uno de julio, y dicho acto se encuentra controvertido por cuanto hace al registro de la coalición entre los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, es indudable que el recurrente puede válidamente recurrir el acuerdo donde se autorizó el registro de convenio de coalición.

Estos criterios, están contenidos en la jurisprudencia 15/2000 y la tesis XII/2011 de rubros: *“PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES”* y *“CONVENIO DE COALICION. PUEDE SER IMPUGNADO POR UN PARTIDO POLITICO DISTINTO A LOS SIGNANTE CUANDO SE PRODUZCA INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES PARA SU REGISTRO”*.

En razón de lo anterior, no es dable sobreseer el presente asunto, en los términos solicitados por el ciudadano Doctor Carlos Torres Ramírez, en su carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado y de la coalición con el Verde Ecologista de México, al no actualizarse la hipótesis jurídica prevista por la fracción III del artículo 325 de nuestro código comicial, ya que si el instituto político recurrente tiene derecho o carece del mismo para cuestionar los procesos internos de selección de candidatos de otros

partidos políticos, es una cuestión que atañe más bien al fondo del asunto, cuyo estudio se abordará en esta misma resolución.

D.- Tampoco se actualiza el supuesto de la fracción IV, habida cuenta que del estudio del escrito de interposición del recurso de revisión, se aprecia que el acto o resolución impugnado no se ha consumado de forma irreparable, pues en el supuesto de que fuera procedente, existe plena factibilidad para reparar la violación alegada, en razón de que, se cuenta aún con oportunidad para corregir algún defecto que pudiera existir en el acuerdo impugnado, y en su caso, en la impresión de las boletas y documentos electorales.

E.- La personería del licenciado Mario Alonso Gallaga Porras, como representante del Partido Acción Nacional, quedó acreditada, por las razones apuntadas supralíneas.

F.- Respecto de las causas de improcedencia que se contienen en las fracciones VI, VII y XI del artículo 325 del código electoral del Estado, consistentes en el hecho de que no se haya interpuesto otro recurso procedente para obtener la modificación, revocación o anulación del acto, o resolución impugnados, no se actualizan ya que el mencionado cuerpo normativo no exige agotar previamente otro recurso, ni contempla otro medio de impugnación que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto impugnado.

En efecto, los artículos 294 y 302 del Código comicial local, prevén los medios de impugnación de revocación y apelación, así como los supuestos que los actualizan, dentro de los cuales no encuadra el acto impugnado; y por el contrario, es correcta la interposición de los recursos de revisión que se resuelven, por estar consignados los actos combatidos dentro de la hipótesis prevista en la fracción VII

del numeral 298 del citado ordenamiento, que a la letra establece:

El recurso de revisión tendrá como efecto la anulación, revocación, modificación o confirmación de la resolución impugnada y procede en los siguientes casos:...fracción VII.- Contra las resoluciones del Consejo General que nieguen o admitan los convenios de coalición de los partidos políticos;...

G.- Las causas que se establecen en las fracciones VIII y IX, tampoco se presentan toda vez que como se desprende del estudio de los recursos, éstos no se promueven contra actos o resoluciones que hayan sido materia de otro recurso resuelto en definitiva, menos aún emitidos en cumplimiento a una resolución definitiva pronunciada con motivo de otro medio de impugnación.

H.- La causal de improcedencia prevista por la fracción XII, no se actualiza, pues no existe disposición expresa del código electoral del Estado, que establezca como irrecurribles los actos impugnados.

TERCERO.- Considerando que no se actualiza ningún motivo de sobreseimiento del acto impugnado, como quedó determinado en el considerando precedente, se procede al análisis del fondo del recurso de revisión.

A.- El licenciado Mario Alonso Gallaga Porras, en su carácter de representante del **Partido Acción Nacional**, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; se manifestó en los siguientes términos:

VI.- EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS QUE CAUSE EL ACTO O RESOLUCION IMPUGNADOS.

Causa agravio al partido político que represento, la resolución recaída dentro del acuerdo CG/054/2012 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en sesión celebrada el 30 de abril de 2012 por el que admite el registro de coalición suscrito por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, toda vez que esta autoridad administrativa electoral fue omisa en analizar cada una de los documentos acompañados al Convenio de Coalición presentado para su aprobación por

los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México; que generó como consecuencia, no haber formulado de manera fundada y motivada, las razones lógico jurídicas para su aprobación, incumpliendo lo establecido por el artículo 36 fracción I primera, del Código Comicial del Estado, derivado de la falta de documentación idónea para acreditar que los partidos coaligados aprobaron de conformidad con sus estatutos la celebración del convenio; violando así, los principios de Certeza, Legalidad y Equidad, con la emisión del acuerdo que se ha identificado por carecer de la adecuada fundamentación y motivación.

Para efecto de lo anterior, se precisa que la norma estatal electoral reguladora de las coaliciones que fue vulnerada, es precisamente el artículo 36 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, que a la letra cita:

“Artículo 36.- Al convenio de coalición deberán anexarse los siguientes documentos:

I.- Las actas que acrediten que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos coaligados aprobaron de conformidad a sus estatutos la firma del convenio, así como la postulación de candidatura para elección de que se trate;

II a III....”

Dispositivo del que se desprenden dos supuestos:

a) El primero relativo a la acreditación de la aprobación de contender en coalición y del convenio a suscribir por los órganos competentes de acuerdo a sus estatutos, y

b) El segundo, referente a la acreditación de la postulación de candidatura para la elección de que se trate, también por los órganos competentes a sus estatutos.

Respecto del primer supuesto contenido en esta fracción I primera del artículo 36 de la legislación electoral vigente en el Estado, que es el que interesa en el presente medio de impugnación, **fue inobservado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato al tener por acreditado el cumplimiento de normas estatutarias internas de los partidos políticos que pretenden la coalición, con la documentación que fue exhibida para tal efecto;** toda vez que como se desprende de la simple lectura de la norma legal invocada, es obligación de los partidos coaligantes, presentar en el convenio respectivo, **las actas que acrediten que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos coaligados aprobaron de conformidad sus**

estatutos, el contender en coalición y la firma del convenio respectivo.

Tal afirmación se sostiene, en virtud de que el contenido de la fracción I primera del artículo 36 comicial señala, que al convenio de coalición que presenten los partidos coaligados, deberán agregar, entre otros documentos, las **actas** que acrediten que los órganos partidistas respectivos, de cada uno de los partidos coaligados, aprobaron de conformidad con sus estatutos la firma del convenio correspondiente.

No obstante tal obligación, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión extraordinaria efectuada el 30 de abril del año en curso, en su primer punto resolutivo, determinó que:

“PRIMERO. Es procedente el registro del convenio de coalición suscrito por los institutos políticos Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, para postular candidatos a diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, en los distritos III, IV, V, VI, VII, XV y XVI.

...”

Tal resolución, fue tomada por el Consejo General, por las razones expuestas dentro del considerando octavo del documento en cita, y que en lo que interesa, señala:

OCTAVO. Que este Consejo General estima que es procedente el registro del convenio de coalición mencionado, en razón de que dicho convenio y sus anexos fueron presentados oportunamente, además de que se colman los requisitos previstos en los artículos 35 y 36 de la ley electoral vigente en la entidad, pues se menciona el nombre y emblemas de los partidos políticos que forman la coalición, se precisa que la elección que la motiva es la de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa en los distritos III, IV, V, VI, VII, XV y XVI; se acompaña el emblema y colores que la identifican, se realiza el nombramiento de los representantes legales de la coalición y se contiene la plataforma electoral que sustentaran los candidatos de la misma.

De igual modo, se anexaron al convenio de coalición las constancias con las que se acredita que los órganos partidistas competentes de los institutos políticos coaligados, aprobaron, de acuerdo a sus estatutos, la firma del convenio, así como la postulación de las candidaturas para la elección de diputados

al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa en los distritos III, IV, V, VI, VII, XV y XVI.

Ello es así, pues, en lo concerniente al Partido Revolucionario Institucional, a la solicitud se adjuntó copia certificada del acta de la segunda sesión extraordinaria y urgente de la Comisión Estatal Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional, celebrada el diecisiete de marzo de dos mil doce, de la que se desprende la autorización otorgada por dicho cuerpo colegiado para que el Presidente del Comité Directivo Estatal suscribiera convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México, a efecto de contender en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en los distritos III, IV, V, VI, VII, XV y XVI. De igual manera se adjuntó copia certificada del acuerdo del tres de marzo de dos mil doce, por el que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional autorizó al Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Guanajuato, a celebrar convenios de coalición con uno o más partidos políticos para el proceso electoral de dos mil doce, en el que se elegirá Gobernador, diputados al Congreso del Estado y miembros de ayuntamientos, en los términos que establecen los estatutos y la legislación local.

Por lo que hace al Partido Verde Ecologista de México,....”

Sin embargo, contrario a lo que se establece la fracción I primera del artículo 36 del Código comicial local, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, omitió analizar si la documentación con la que los órganos partidistas presentaron junto con el convenio de coalición respectivo, reunía los requisitos dispuestos por el propio numeral precipitado, solamente dicha autoridad electoral, se concreta en señalar, dentro del tercer párrafo, del considerando octavo de la resolución que ahora se impugna, que en lo concerniente a la documentación presentada por el Partido Revolucionario Institucional relativa a la solicitud de aprobación del convenio de coalición, adjuntó copia certificada, entre otras, del acuerdo de tres de marzo de dos mil doce, por el que el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, autorizó al Comité Directivo Estatal del mismo, a celebrar convenios de coalición con uno o más partidos políticos para el proceso electoral del dos mil doce.

Por su trascendencia, se transcribe el contenido de tal documental:

<<México, D.F. a 3 de marzo de 2012

**ING. JOSÉ LUIS GONZALEZ URIBE
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO
ESTATAL DEL PRI EN GUANAJUATO
PRESENTE.**

En respuesta a su solicitud para celebrar convenios de coalición para el Proceso Electoral 2012 en el Estado de Guanajuato, con fundamento en los artículos 7, 9 fracción I y IV, 85. Fracción II. 119. Fracción XXV, y 196 de los Estatutos que rigen la vida interna del Partido Revolucionario Institucional; en relación con el artículo 68, fracción XXVI, del Reglamento del Consejo Político Nacional, se expide el siguiente:

Acuerdo

ÚNICO.- El Comité Ejecutivo Estatal Nacional del Partido Revolucionario Institucional autoriza al Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato, a celebrar convenios de coalición con unos o más partidos políticos para el Proceso Electoral 2012 en el que se elegirá Gobernador, Diputados al Congreso del Estado Miembros de los Ayuntamientos, en los términos que establecen los Estatutos y la legislación local.

Deberá usted informar oportunamente a este Comité Ejecutivo Nacional sobre los trámites que realice, así como de las resoluciones que emitan las autoridades electorales competentes.

**ATENTAMENTE
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL”**

SEN. PEDRO JOAQUIN COLDWELL
DIAZ SALAZAR

DIP. MARIA CRISTINA

PRESIDENTE

SECRETARIA
GENERAL >>

Con el oficio reproducido previamente, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, tiene por colmados los extremos de la fracción I primera del artículo 36 del Código Electoral estatal, pese a que dicha documental, no es la idónea para el efecto que dispone el propio numeral. Lo anterior se afirma de que el Partido Revolucionario Institucional haya agregado para efecto de acreditar que contaba con la autorización para la celebración del convenio que por parte de

su Comité Ejecutivo Nacional, un documento diverso a los que dispone la fracción I primera del numeral 36 multicitado, debió haber sido causa suficiente para que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado determinara que dicha aprobación no fue acreditada en los términos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, que ordena que, para acreditar la aprobación de la celebración de convenios de coalición, deberán anexarse las **actas** de los órganos partidarios facultados para ello que así lo comprueben.

Sobre el particular, los artículos 9, fracción I, 85, fracciones II y XIV, 86, fracción I, 89, fracción VII, 116, fracción I, y 119, fracción XXV, de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, establecen en su parte conducente, lo siguiente:

“Artículo 9. Para la formación de coaliciones y candidaturas comunes, acuerdos de participación o cualquier alianza con partidos políticos o agrupaciones políticas cuya aprobación corresponda conforme a los presentes Estatutos a los Consejos Políticos Estatales o del Distrito Federal se observará lo siguiente:

I. Tratándose de elecciones de Gobernador o Jefe de Gobierno, Diputado Local por el principio de mayoría relativa, Ayuntamiento, Diputado a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa y Jefe Delegacional en el Distrito Federal, el Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal que corresponda, previo acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional, deberá presentar la solicitud para formar la coalición o postular la candidatura común ante el Consejo Político respectivo, el cual discutirá y, en su caso, aprobará:

“Artículo 85. El Comité Ejecutivo Nacional, tendrá las atribuciones siguientes:

II. Ser el representante nacional del partido con facultades de supervisión y en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas, en los términos de la ley;

XIV. Las demás que se le señalen estos Estatutos.”

“Artículo 86. El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Convocar al Comité Ejecutivo Nacional, presidir sus sesiones y ejecutar sus acuerdos;

“Artículo 89. El Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, tendrá las atribuciones siguientes:

VII. Comunicar a quien corresponda los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional y del Presidente;

Artículo 116. Las comisiones del Consejo Político Estatal y del Distrito Federal, tendrán las atribuciones siguientes:

I. La Comisión Política Permanente ejercerá las atribuciones del Consejo Político Estatal y del Distrito Federal en situaciones de urgente y obvia resolución, en los períodos entre una sesión ordinaria y la siguiente, y dará cuenta con la justificación correspondiente al pleno del Consejo Político respectivo de los asuntos que haya acordado:

“Artículo 119. Son atribuciones de los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal:

XXV. Conocer y aprobar, en su caso, las propuestas (sic) para suscribir frentes, coaliciones, candidaturas comunes, y otras formas de alianza que establezca la ley de la materia, para que, por conducto del Presidente del Comité Directivo de que se trate, se solicite el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional;

...”

Los Estatutos transcritos del partido coaligante, son visibles en el vínculo de la página oficial de ese partido: http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Directorio_y_documentos_basicos/http://www.prinl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=65

De la normativa interna se advierte que es atribución de los Consejos políticos Estatales, conocer y aprobar la propuesta para suscribir coaliciones para cargos de elección popular en las entidades federativas, siguiendo el procedimiento mencionado. El Comité Directivo Estatal que corresponda, previo acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional, deberá presentar la solicitud para formar la coalición ante el Consejo Político respectivo, el cual la discutirá y, en su caso, aprobará. El Comité Ejecutivo Nacional está facultado para autorizar las decisiones de otras instancias partidistas, y en el caso, la solicitud de coalición que formule un Comité Directivo Estatal.

El Comité Ejecutivo Nacional es el representante nacional del partido con facultades de supervisión y de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas, como en el caso de los convenios de coalición.

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional está facultado para presidir las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional y

ejecutar los acuerdos. El Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional tiene entre sus atribuciones la de comunicar los acuerdos de dicho Comité o de su Presidente.

La Comisión Política Permanente está facultada para ejercer las atribuciones del Consejo Político Estatal en situaciones de urgente y obvia resolución.

Por lo anterior, el órgano partidista con facultades para conocer y aprobar propuestas para concertar convenios de coaliciones, es el Consejo Político Estatal del citado instituto político en Guanajuato o, en situaciones de urgente y obvia resolución, por la comisión Política Permanente en términos del artículo 116, fracción I de los referidos Estatutos.

Asimismo, dicha aprobación debe contar con el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, a petición del Comité Directivo Estatal en el Estado de Guanajuato.

De los Estatutos en lo que al caso interesa, se advierte que el Comité Ejecutivo Nacional toma sus decisiones en sesiones que en su caso son presididas por el Presidente de dicho comité, quien a su vez está facultado para ejecutar los acuerdos que tomó el citado órgano colegiado partidista.

En el caso, es evidente que el documento transcrito, firmado por el Presidente y la Secretaria General de dicho órgano partidario, no tiene el carácter de acta de la respectiva sesión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, pues de él no se coligen las circunstancias bajo las cuales fue aprobado, en su caso, la celebración del convenio de coalición.

Por ello resulta insuficiente el documento transcrito, a fin de acreditar que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional autorizó al Comité Directivo Estatal del Instituto político antes mencionado, a celebrar convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México para el Proceso Electoral Local 2012.

Es así que el documento aportado por el Partido Revolucionario Institucional no es el idóneo para considerar que la coalición "Compromiso por Guanajuato" cumplió con el requisito de acreditar que los partidos políticos coaligados cuentan con la autorización de los órganos facultados en sus estatutos para celebrar el convenio respectivo en este caso para la elección de Diputados al Congreso del Estado de Guanajuato.

Es así que la norma inobservada por el Consejo General del IEEG en su acuerdo impugnado, que lo es el artículo 36 fracción primera en su primer supuesto, como se ha reiterado, causa agravio al haberse aprobado con baso en tal dispositivo legal, sin haber realizado la entidad electoral estatal infractora, la verificación del cumplimiento de ese dispositivo en las solicitudes de registro de convenio de coalición de los partidos PRI y PVEM; y mucho menos, haber realizado las consideraciones lógico-jurídicas que en vía de motivación y fundamentación debió haber realizado, pues las omisiones estatutarias redundan en violaciones legales tal y como se advierte de la interpretación que a continuación se invoca por resultar aplicable al caso concreto bajo el argumento de analogía: ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU VIOLACIÓN CONTRAVIENE LA LEY.

De la interpretación del artículo 269, párrafo 1 y 2, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 38 del citado ordenamiento legal, se puede desprender que cuando un partido político nacional incumpla sus disposiciones estatutarias, ello genera el incumplimiento de disposiciones legales, en virtud de que la obligación que pesa sobre los partidos políticos para conducir sus actividades dentro de los cauces legales, debe entenderse a partir de normas jurídicas en un sentido material (toda disposición jurídica constitucional, legal, reglamentaria o estatutaria que presente las características de generalidad, abstracción, impersonalidad, heteronomía y coercibilidad), como lo permite concluir la interpretación sistemática del artículo 41, párrafo segundo, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte en que se dispone que los partidos políticos tienen ciertas finalidades y que para su cumplimiento lo deben hacer de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, así como de lo dispuesto en el propio artículo 38, párrafo 1, incisos a), b),d), e), f) h), i), j), l), m) y n), del código en cita, ya que ahí se contiene prescripciones legales por las cuales se reconoce el carácter vinculatorio de disposiciones que como mínimos deben establecerse en sus documentos básicos y, particularmente, en sus estatutos. Al respecto, en el artículo 38 se prevé expresamente la obligación legal de los partidos políticos nacionales de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados; conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático,

respetando los derechos de los ciudadanos, mantener en funcionamiento efectivo sus órganos estatutarios, y comunicar al Instituto Federal Electoral las modificaciones a sus estatutos. Esto revela que el respeto de las prescripciones estatutarias – como en general, de la normativa partidaria – es una obligación legal. No es obstáculo para arribar a lo anterior, el hecho de que en dicho artículo 38 no se prevea expresamente a todos y cada uno de los preceptos que, en términos del artículo 27 del código de la materia, se deben establecer en los estatutos de un partido político, como tampoco impide obtener esta conclusión el hecho de que, en el primer artículo de referencia, tampoco se haga mención expresa a algunas otras normas partidarias que adicionalmente decidan los partidos políticos incluir en su normativa básica. Lo anterior es así, porque si en la Constitución federal se reconoce a los principios, programas e ideas de los partidos políticos como un acuerdo o compromiso primario hacia el pueblo y especialmente para los ciudadanos, lo que destaca la necesidad de asegurar, a través de normas jurídicas, su observancia y respeto, en tanto obligación legal y, en caso de incumplimiento, mediante la configuración de una infracción que dé lugar a la aplicación de sanciones. En ese sentido, si los partidos políticos nacionales tienen la obligación de cumplir lo previsto en el Código Federal Electoral y ahí se dispone que deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales, es claro que uno de dichos cauces es el previsto en las normas estatutarias.

Recurso de apelación. SUP-RAP-041/2002. Partido de la Revolución Democrática. 28 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: José Félix Cerezo Vélez.

Nota: El contenido del artículo 41, párrafo segundo, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados en esta tesis, corresponde con el 41, párrafo segundo, base I, párrafo segundo, de la Constitución vigente, asimismo, el artículo 269, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde con el 354, del ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación.

Es de establecerse en consecuencia que dicho acuerdo, incumple con la debida motivación y fundamentación para tener por debidamente satisfechos los extremos del artículo 36 fracción I del Código estatal de la materia, pues como se ha evidenciado, con las documentales acompañadas al Convenio de Coalición, no se satisface lo establecido por dicho numeral. Afectándose, en agravio del interés público y adecuado desarrollo del proceso electoral en el Estado de Guanajuato,

los principios de Certeza, Legalidad y Equidad electoral, establecidos en los artículos siguientes:

- De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 41 y 116.
- De la Constitución Política del Estado de Guanajuato, los artículos 2, 17 y 31.
- Del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, los artículos 1, 18, 34, 36 y 47.

Como se aprecia, la determinación expuesta por el Instituto Electoral, es motivo de disenso, toda vez que se ha argumentado por Acción Nacional, las razones por las que la resolución combatida se apartó de los principios electorales que sustentan la debida actuación del Instituto Estatal Electoral.

Así las cosas, el agravio al Partido Acción Nacional, se surte en lo sustancial porque la resolución administrativa electoral, es ilegal toda vez que se funda en consideraciones no acreditadas en los términos previstos por el Código comicial, pues se advierte que sus actos son evidentes vulnerantes de todo principio que rige la actividad electoral, pues no expresa ni justifica por qué dicho órgano electoral otorga al oficio del tres de marzo de dos mil doce, el valor suficiente para satisfacer, como se ha señalado, los extremos del artículo 36 fracción I de la Ley Comicial, cuando no se adjuntaron las actas con las que se acrediten que los órganos partidistas aprobaron de conformidad con sus estatutos de la firma del convenio, lo que se constituye en una infracción a la ley de acuerdo con la interpretación de la tesis de rubro: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU VIOLACIÓN CONTRAVIENE LA LEY”.

Acuerdo combatido que tiene además y consecuentemente una falta de fundamentación y motivación.

A fin de evidenciar lo anterior, cabe expresar por su importancia, que en la resolución que se impugna mediante el Recurso de Revisión, se presenta de manera clara, en qué consiste de observancia a los principios de legalidad, objetividad, certeza y equidad, principios rectores que toda autoridad electoral debe observar en todas y cada una de las resoluciones que emita y en su actuar, con ello no se cumplió en la tesis jurisprudencial siguiente:

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del artículo 116 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.

Acción de inconstitucionalidad 19/2005. Partido del Trabajo. 22 de agosto de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente:

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con el número 144/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de octubre de dos mil cinco.

Localización: Novena época, Instancia: Pleno: Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Noviembre de 2005, Página 111; Tesis: P./J. 144/2005 Jurisprudencia Materia (s): Constitucional.

Por ello en el agravio esgrimido respecto a la resolución en comento, presentamos la inadecuada aplicación de cada uno de los principios de legalidad, equidad y certeza debido a que el Instituto Estatal Electoral, con la emisión del acuerdo que se combate, causa una falta de certeza pues como se advierte en los anexos y consideraciones del propio acuerdo, ambos coaligantes, presentan diversa información para acreditar sus actos internos, ello a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 36 de nuestra legislación electoral vigente, lo que en la especie no se surte, causando con ello, ante la propia omisión de la autoridad señalada como responsable del acto que se impugna, que se aprueba indebida e ilegalmente un convenio de coalición que no cumple con los extremos legales requeridos para ello, como lo hemos evidenciado.

El partido político al que represento en todo momento sostiene la falta de una adecuada y esmerada consideración, por demás exhaustiva, para tener por justificada la norma aplicable a las coaliciones, aplicando deficientemente su verificación, vulnerando con el ello el principio de legalidad electoral como se señala en el siguiente criterio jurisprudencial.

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.- De conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3º. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.

Tercera época:

Jurisprudencia visible en la Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 24-25, Sala Superior, tesis número S3ELJ 21/2001.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 173-174”

La falta de exhaustividad deviene de la falta de atención de la autoridad administrativa electoral, para valorar la idoneidad del oficio del tres de marzo de dos mil doce para tener por acreditados los extremos del numeral 36 ya antes mencionado, que a juicio de este Instituto Político, vulneró además el principio de equidad en nuestro perjuicio, así como del interés público.

La falta de objetividad, deviene de la desatención de los elementos presentados como evidencia de la vulneración de principios electorales, pues sin entrar a su estudio adecuadamente, califica como idóneas las documentales ofrecidas por los coaligantes, cuando se considera que esta autoridad administrativa electoral, tiene las facultades para verificar el cumplimiento de las normas de cada partido coaligante y los términos en que éstos deben de acreditarlas.

Por su similitud con los argumentos que aquí se exponen, se invoca como precedente la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-15/2010, en cuyas consideraciones establece que:

“... Por lo expuesto, contrariamente a lo sostenido por el partido político accionante, la facultad revisora otorgada al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, al recibir la solicitud de registro de un convenio de coalición, **no se limita a la simple revisión documental de lo anexado a la solicitud respectiva, sino que implica además, el deber de constar que el procedimiento interno para la aprobación de la coalición, esté apegado al Estatuto de cada instituto político coaligante**, elemento fundamental para que la aludida autoridad electoral administrativa, en ejercicio de sus atribuciones, determine sobre la procedibilidad de su registro.

Máxime si se considera que el artículo 20, segundo párrafo, base II, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, prevé, entre otros principios rectores de la función estatal electoral, el de legalidad, el cual debe ser observado por los partidos políticos, en todos sus actos de conformidad con el artículo 72, fracción I, del Código Electoral de la citada entidad federativa, correspondiendo al Instituto electoral local velar por su cumplimiento, de tal manera que la labor de ese órgano administrativo no sólo se constriñe a la revisión documental, como afirma con error el accionante, sino que se extiende a comprobar que se hayan cumplido los requisitos previstos en la citada normativa electoral, para la aprobación de convenios de coalición.” (Lo resaltado por su importancia, es nuestro)

Así las cosas, resulta ilegal, y falto de fundamentación y motivación el acuerdo combatido, vulnerándose con tal acto de la Autoridad administrativa electoral del Estado, por ende, la garantía de legalidad, al no entrarse al estudio de los documentales agregados al convenio a fin de establecer debidamente, si se cumplía o no, con la disposición contenida en el artículo 36 de la legislación estatal electoral y manifestar que en circunstancias distintas, con documentos insuficientes y no idóneos, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato acuerda la procedencia del registro de la Coalición entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista.

Sustenta todo lo anterior, lo expuesto en las siguientes jurisprudencias:

“FUNDAMENTACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD.

El artículo 16 de la Constitución General del país, señala que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, y por su parte, la jurisprudencia número 260 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Materia Común, establece que por fundamentación, debe entenderse la cita precisa del precepto legal aplicable al caso; ahora bien, esto último se refiere no sólo al artículo exacto, sino también a la ley o reglamento particularmente aplicable, de modo que en aquellos casos en que se invocan determinados artículos, y varias leyes o reglamentos, explicándose que aquéllos pertenecen a uno y/o a otro, es decir, a cualquiera de los ordenamientos referidos, en tal caso no puede considerarse que ese acto satisfaga el requisito constitucional de fundamentación, ya que no corresponde a los gobernados el relacionar su conducta a las diversas hipótesis legales en que pudiera encuadrar, de las varias leyes o reglamentos que se invocaron como fundamento del acto de autoridad, para sostener con ello averiguar cuál es la disposición y la ley o reglamento exacto que enmarca su caso, y por el contrario, es dicha autoridad la que está constreñida a hacerlo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Amparo en revisión 248/96.- Patricia Maricela Córdova Sánchez.- 17 de octubre de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo Baltazar Alvear.- Secretario: Guillermo Salazar Trejo.”

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA INADECUADA O INDEBIDA EXPRESIÓN DE ESTA GARANTÍA CONFIGURA UNA VIOLACIÓN FORMAL A LA LEY APLICADA. La exigencia que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en el sentido de que las autoridades funden y motiven sus actos queda satisfecha desde el punto de vista formal cuando se expresan las normas legales aplicables,

así como los razonamientos tendientes a adecuar el caso concreto a esa hipótesis normativa. Ahora bien, tratándose de la debida motivación basta que la autoridad exprese los razonamientos sustanciales al respecto sin que pueda exigirse que se abunde más allá de lo estrictamente necesario para que se comprenda el razonamiento expresado. En este sentido, sólo podrá estimarse que se transgrede la garantía de motivación cuando dichos razonamientos sean tan imprecisos que no proporcionen elementos al gobernador para defender sus derechos, o bien, impugnar aquéllos. En consecuencia, si se satisfacen los requisitos esenciales de fundamentación y motivación de manera tal que el gobernado conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad y quede plenamente capacitado para desvirtuarlos, pero se aplica indebidamente la ley, propiamente no se está en el caso de la violación a la garantía a que se refiere el artículo 16 citado, sino en presencia de una violación formal a la ley aplicada por la indebida o inadecuada expresión de esa fundamentación y motivación.”

TESIS S3ELJ 21/2001 “PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.- De conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II y 116, fracción IV , incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3o. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismo para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político- electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.

Derivado de todo lo anterior es por lo que debe de revocarse la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y por ende, tenerse por **IMPROCEDENTE EL REGISTRO DEL CONVENIO DE COALICIÓN SUSCRITO POR LOS INSTITUTOS POLÍTICOS PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARA POSTULAR CANDIDATOS A DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN LOS DISTRITOS III, IV, V, VI, VII XV Y XVI.**

B.-En este apartado se procede al examen de los agravios expresados por el partido disidente, para lo cual se abordará su estudio de manera conjunta o separada según se requiera, lo que en forma alguna lesiona los intereses jurídicos del inconforme, al abordarse como interesa, cada uno de los conceptos de discordia vertidos en el pliego impugnativo, mismos que se estiman improcedentes por las razones expuestas líneas abajo.

Lo anterior encuentra sustento en la tesis visible en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6, que dice:

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. *El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.”⁴*

I.- Es parcialmente **fundado**, pero **inoperante** el agravio relativo a que el acuerdo **CG/054/2012** del Consejo General del Instituto Electoral para el Estado de Guanajuato, adolece de fundamentación y motivación resulta parcialmente fundado pero inoperante, por las razones que se vierten a continuación.

Para dar una debida contestación a los argumentos de discordia, debe recordarse que el primer párrafo del artículo 2 de nuestra Constitución Política, refiere:

El Poder Público únicamente puede lo que la Ley le concede y el gobernado todo lo que ésta no le prohíbe.

De lo que se desprende que la autoridad sólo puede hacer todo aquello lo que la ley le autoriza, lo cual se encuentra en franca congruencia con el principio de legalidad

y seguridad jurídica, establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.

En efecto debe considerarse que todos los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados, debiéndose entender por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.

Funda lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/43 sustentada por el segundo tribunal colegiado del sexto circuito visible en la página 769 del tomo III, Marzo de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la novena época, que dice:

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. *La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.*

En esta tesitura a través de la **debida** fundamentación y motivación es que el gobernado puede conocer con detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, y así poder cuestionarlo o controvertirlo, permitiendo así una adecuada defensa.

Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número I.4o.A. J/43 sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la materia común, visible en la página 1531 del tomo XXIII, Mayo de 2006 del Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época,
que reza: - - - - -

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. *El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.*

De lo que se infiere que la fundamentación y motivación sólo tiene como propósito que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera tal que permita al justiciable cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.

Por ello tal garantía, se satisface cuando se expresa lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, por lo que deben exponerse los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente

para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado.

En tanto que fundar un acto de autoridad, supone apoyar la procedencia de tal acto en razones legales que se encuentran establecidas en un cuerpo normativo; y ese mismo acto estará motivado cuando la autoridad que lo emita explique o dé razón de los motivos que la condujeron a emitirlo.

Una de las acepciones contenida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de la palabra «fundar» (del latín fundare) es apoyar algo con motivos y razones eficaces con discursos; por su parte “motivar” implica, entre otras cosas, dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo.

Esta obligación legal de apoyar las determinaciones de la autoridad en los preceptos legales aplicables al caso concreto, generalmente se satisface a cabalidad, o bien de plano la autoridad omite en su totalidad sustentar sus decisiones en las normas jurídicas aplicables al caso concreto, así como explicar las razones para emitir su actuar que trasciende a la esfera de los gobernados.

La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una y otra, por lo que el estudio de la primera, debe hacerse de manera previa al estudio de fondo que corresponde a la segunda.

Así, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar los actos

que incidan en la esfera de los gobernados, lo cual implica que dicha exigencia sea susceptible de ser vulnerada en dos formas: por la falta o ausencia y por la indebida o incorrecta fundamentación y motivación.

Se produce la falta o ausencia de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica.

En cambio, hay una indebida o incorrecta fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso.

De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto.

La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos esenciales, connaturales al mismo por virtud de un imperativo constitucional. En el segundo caso, consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma

mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos o insuficientes.

Dicha diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los agravios que se hacen valer, ya que si en un caso se advierte la carencia de fundamentación y motivación, lo cual se traduce en una violación formal, deberá ser atendida en primer término; sin embargo, de resultar insuficiente para revocar la resolución impugnada, se deberá proceder al análisis de los motivos de disenso atinentes a la inadecuada o incorrecta fundamentación y motivación, que tienen el carácter de violación material o de fondo, ya que se dirigen a controvertir el razonamiento y justificación de la autoridad responsable al resolver el fallo combatido.

Las anteriores reflexiones se encuentran en la jurisprudencia I.3o.C. J/47, de Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Febrero de 2008, Página: 11174, que reza:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. *La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características*

específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo.

Limitado el marco anterior, se procede a analizar si el acuerdo CG/054/2012 de fecha treinta de abril del año que transcurre adolece de motivación y fundamentación, como lo sostiene el recurrente, mismo que a continuación se transcribe:

OCTAVO. Que este Consejo General estima que es procedente el registro de convenio de coalición mencionado en razón de que dicho convenio y sus anexos fueron presentados oportunamente, además de que se colman los requisitos previstos en los artículos 35 y 36 de la ley electoral vigente en la entidad, pues se menciona el nombre y emblemas de los partidos políticos que forman la coalición, se precisa que la elección que la motiva es la de

ayuntamientos del Estado, se acompaña el emblema y colores que la identifican, así como las listas de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional de cada uno de los partidos políticos coaligados, se realiza el nombramiento de los representantes legales de la coalición y se contiene la plataforma electoral que sustentarán los candidatos de la misma.

De igual modo, se anexaron al convenio de coalición las constancias con las que se acredita que los órganos partidistas competentes de los institutos políticos coaligados, aprobaron, de acuerdo a sus estatutos, la firma del convenio, así como la postulación de las candidaturas para la elección de diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa en los distritos III, IV, VI, VII, XV y XVI.

Ello es así, pues, en lo concerniente al Partido Revolucionario Institucional, a la solicitud se adjunto copia certificada del acta de la segunda sesión extraordinaria y urgente de la Comisión Estatal Política del Partido Revolucionario Institucional, celebrada el diecisiete de marzo de dos mil doce, de la que se desprende la autorización otorgada por dicho cuerpo colegiado para que el Presidente del Comité Directivo Estatal suscribiera convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México, a efecto de contender en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en los distritos III, IV, VI, VII, XV y XVI. De igual manera se adjuntó copia certificada del acuerdo del tres de marzo de dos mil doce, por el que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional autorizó al Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Guanajuato, a celebrar convenios de coalición con uno o más partidos políticos para el proceso electoral de dos mil doce, en el que se elegirá Gobernados, diputados al Congreso del Estado y miembros de ayuntamientos, en los términos que establecen los estatutos y la legislación local.

Por lo que hace al Partido Verde Ecologista de México, se adjunto copia certificada del acta de fecha diecisiete de marzo de dos mil doce, del Consejo Político del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de Guanajuato, en la que se contiene el acuerdo mediante el cual se aprueba contender en coalición parcial con el Partido Revolucionario Institucional, entre otros, para los cargos de diputados locales en los distritos III, IV, VI, VII, XV y XVI y se solicita al Secretario General de Comité Ejecutivo en el Estado de Guanajuato que someta a la consideración del Consejo político Nacional, la ratificación de contender en coalición parcial con el Partido Revolucionario Nacional, entre otros, para la elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa en los distritos III, IV, VI, VII, XV y XVI, así como la ratificación de la aprobación del convenio de coalición correspondiente, y la autorización para que el Secretario del Comité Ejecutivo del Estado de Guanajuato suscriba el convenio de coalición. De igual manera, se presentó copia certificada del acuerdo CAPN-13/2012 del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México, de fecha veintiuno de marzo de dos mil doce, del que se desprende la ratificación otorgada al Comité Ejecutivo del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de Guanajuato, para contender en coalición parcial con el Partido Revolucionario Institucional, entre otros, para la elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa en los distritos III, IV, VI, VII, XV y XVI; la ratificación de la aprobación del convenio de coalición correspondiente, así como la autorización para que el Secretario

del Comité Ejecutivo del Estado de Guanajuato suscriba el convenio de coalición.

Asimismo, se acompañaron los documentos con los que se demuestra que los partidos coaligados entregaron en tiempo y forma su plataforma electoral a esta autoridad electoral.

Por otro lado, en cumplimiento a lo establecido en el punto primero, numerales 7 y 8, del acuerdo a que se hace referencia en el resultando primero del presente acuerdo, se precisó que la representación de la coalición ante los consejos electorales y mesas directivas de casilla correspondientes, la llevará el partido de origen de conformidad con la cláusula cuarta del convenio.

En tal virtud el Partido Revolucionario Institucional llevará la representación de la coalición ante los consejos distritales electorales III, IV, y VI de León, XVI de Celaya, así como ante las mesas directivas de casilla correspondientes.

El Partido Verde Ecologista de México llevará la representación de la coalición ante los consejos distritales electorales VII de León y XV de Celaya, así como ante las mesas directivas de casilla correspondientes.

Además de lo anterior, en el convenio de que se trata se precisó que la representación legal de la coalición corresponderá a los ciudadanos Carlos Joaquín Chacón Calderón, Ma. Guadalupe Sánchez Centeno, Beatriz Manrique Guevara, José Luis González Uribe, Carlos Torres Ramírez, Martín Reyna Martínez Francisco Javier Contreras Ramírez y Sergio Alejandro Contreras Guerrero, y que el domicilio legal de la misma se establecerá en Paseo de la Presa número treinta y siete, en la ciudad de Guanajuato, y en calle Praga número quinientos cinco, colonia Andrade, en la ciudad de León, Guanajuato.

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, párrafo segundo y tercero, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, y 35, 36, 46, 51, 63, fracción VIII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato, se somete a la consideración del Consejo Electoral, la siguiente:...

De la transcripción anterior, se advierte que la autoridad responsable sustentó la decisión asumida en el acuerdo recurrido en los artículos 31, párrafo segundo y tercero, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, y 35, 36, 46, 51, 63, fracción VIII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato; de ahí que estime debidamente fundado dicho acuerdo, pues expresa que la génesis de sus razonamientos se encuentran sustentados en siguientes dispositivos legales.

El artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, dispone en los párrafos segundo y tercero lo siguiente:

ARTÍCULO 31.

(...)

La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, definitividad, equidad, objetividad y profesionalismo serán principios rectores en el ejercicio de esta función estatal.

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato será autoridad en la materia. Profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones; se estructurará con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

...

En tanto que los numerales relativos al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato, indican:

ARTÍCULO 35. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TENDRÁN DERECHO A FORMAR COALICIONES PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS ELECTORALES. LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE PRETENDAN FORMAR UNA COALICIÓN DEBERÁN SUSCRIBIR UN CONVENIO A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, EL QUE REGISTRARÁN ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO HASTA CINCO DÍAS ANTES DE LA FECHA DE INICIO DEL PERIODO DE REGISTRO DE CANDIDATOS EN LA ELECCIÓN QUE CORRESPONDA.

EL CONVENIO DE COALICIÓN DEBERÁ CONTENER:

I. EL NOMBRE Y EMBLEMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA FORMAN;

II. LA ELECCIÓN QUE LA MOTIVA, HACIENDO SEÑALAMIENTO EXPRESO DEL DISTRITO O DISTRITOS, MUNICIPIO O MUNICIPIOS O LISTA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL;

III. DEROGADA;

IV. EL EMBLEMA Y COLORES QUE IDENTIFIQUEN A LA COALICIÓN, MISMO QUE PODRÁ INCLUIR LOS EMBLEMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA CONSTITUYAN;

V. LA PLATAFORMA ELECTORAL QUE SUSTENTARÁN LOS CANDIDATOS DE LA COALICIÓN; Y

VI. INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO DE ELECCIÓN, CONVENIO Y TÉRMINOS QUE EN EL MISMO ADOPTEN LOS PARTIDOS COALIGADOS, CADA UNO DE ELLOS APARECERÁ CON SU PROPIO EMBLEMA EN LA BOLETA ELECTORAL, SEGÚN LA ELECCIÓN DE QUE SE TRATE; LOS VOTOS SE SUMARÁN PARA EL CANDIDATO DE LA COALICIÓN Y CONTARÁN PARA CADA UNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA TODOS LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN ESTE CÓDIGO;

(FRACCIÓN REFORMADA. P.O. 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2008)

VII. LAS LISTAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS O REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE CADA UNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS; Y

VIII. EL NOMBRAMIENTO DE O LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA COALICIÓN.

ARTÍCULO 36. AL CONVENIO DE COALICIÓN DEBERÁN ANEXARSE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

I. LAS ACTAS QUE ACREDITEN QUE LOS ÓRGANOS PARTIDISTAS RESPECTIVOS DE CADA UNO DE LOS

PARTIDOS COALIGADOS APROBARON DE CONFORMIDAD A SUS ESTATUTOS LA FIRMA DEL CONVENIO, ASÍ COMO LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURA PARA LA ELECCIÓN DE QUE SE TRATE;

II. LA DOCUMENTAL QUE ACREDITE QUE LOS PARTIDOS COALIGADOS ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA SU PLATAFORMA ELECTORAL A LA AUTORIDAD ELECTORAL CORRESPONDIENTE; 55

III. CUANDO LA COALICIÓN TENGA POR OBJETO PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN ESTATAL PARA GOBERNADOR O PARTICIPAR EN LA MAYORÍA DE LOS DISTRITOS UNINOMINALES EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS, LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBERÁN ACREDITAR QUE SUS ASAMBLEAS O CONVENCIONES ESTATALES APROBARON LA PLATAFORMA ELECTORAL DE LA COALICIÓN, CONFORME A LOS ESTATUTOS, DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN DE CADA UNO DE LOS PARTIDOS INTERESADOS; Y

IV. PARA LA POSTULACIÓN DE LISTA ÚNICA DE CANDIDATOS EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, LA COALICIÓN DEBERÁ ACREDITAR QUE PARTICIPA CUANDO MENOS EN QUINCE DE LOS DISTRITOS UNINOMINALES.

RECIBIDA UNA SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE COALICIÓN, SE VERIFICARÁ DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO HORAS SIGUIENTES, QUE SE CUMPLIERON TODOS LOS REQUISITOS. SI DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA SE ADVIERTE QUE SE OMITIÓ EL CUMPLIMIENTO DE UNO O VARIOS REQUISITOS SE NOTIFICARÁ AL PROMOVENTE, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE CUARENTA Y OCHO HORAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN SUBSANE EL O LOS REQUISITOS OMITIDOS.

CUALQUIER SOLICITUD O DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FUERA DE LOS PLAZOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 35 DE ESTE CÓDIGO Y EL PÁRRAFO ANTERIOR, SERÁ DESECHADA DE PLANO. SI NO FUERON SATISFECHOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN ESTE CÓDIGO, NO SE REGISTRARÁ EL CONVENIO DE COALICIÓN.

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO RESOLVERÁ SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE COALICIÓN ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS.

UNA VEZ REGISTRADO EL CONVENIO, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO ORDENARÁ SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

UNA VEZ REGISTRADO EL CONVENIO DE COALICIÓN, LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES, PROCEDERÁN A NOMBRAR A SUS REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO GENERAL Y EN SU CASO, ANTE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES CORRESPONDIENTES. ACREDITADOS LOS REPRESENTANTES DE LA COALICIÓN EN LOS ÓRGANOS RESPECTIVOS CESARÁ LA REPRESENTACIÓN DE LOS

PARTIDOS EN LO INDIVIDUAL. LA COALICIÓN QUE NO HAYA ACREDITADO A SUS REPRESENTANTES NO FORMARÁ PARTE DEL ÓRGANO ELECTORAL RESPECTIVO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL.

ARTÍCULO 46. EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO ES EL ÓRGANO PÚBLICO AUTÓNOMO, DOTADO DE INDEPENDENCIA FUNCIONAL, DE CARÁCTER PERMANENTE, 56

CON PERSONALIDAD JURÍDICA, PATRIMONIO PROPIO Y FACULTAD REGLAMENTARIA, AL QUE CORRESPONDE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ESTATAL DE ORGANIZAR LOS PROCESOS ELECTORALES. LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES RELATIVAS Y POR ESTE CÓDIGO.

ARTÍCULO 51. EL CONSEJO GENERAL ES EL ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, AL QUE CORRESPONDE LA PREPARACIÓN, DESARROLLO Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES DE CARÁCTER ESTATAL. SU DOMICILIO ESTARÁ UBICADO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.

ARTÍCULO 63. SON ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL, LAS SIGUIENTES:

[...]

VIII. RESOLVER SOBRE LOS CONVENIOS DE FRENTES, FUSIONES Y COALICIONES, QUE SOMETAN A SU CONSIDERACIÓN LOS PARTIDOS POLÍTICOS;

De la lectura de los preceptos legales insertados, se desprende que resultan exactamente aplicables a la decisión asumida por la autoridad administrativa electoral en el acuerdo impugnado, en virtud de que:

a) Regulan los requisitos que debe reunir el convenio de coalición que formen los partidos políticos;

b) Los documentos que tienen que acompañarse, el procedimiento que ha de seguirse para registrar el mismo ante la autoridad administrativa electoral;

c) La naturaleza jurídica del Instituto Electoral del Estado y las facultades de su Consejo General, en particular la atribución relativa a la determinación correspondiente a los convenios de coalición que sometan a su consideración los partidos políticos.

d) En cuanto a la norma de carácter constitucional, establece lo relativo a la función estatal que realiza el Instituto Electoral del Estado, así como los principios que han de regir su actuar.

Con lo anterior, es fácil deducir que el contenido de dichos preceptos tiene relación directa e inmediata con el acuerdo CG/054/2012 asumido por la autoridad responsable.

En esta línea de argumentación, resulta claro que la resolución atacada satisface el requisito de fundamentación que todo acto de autoridad ha de observar; por lo que debe calificarse de **infundada** la parte del agravio analizado.

Empero, por lo que hace a la diversa satisfacción de la garantía constitucional de motivación inherente al acto de autoridad, es fundado, en virtud de que la autoridad responsable se limitó a afirmar de manera genérica que las documentales que le fueron presentadas por los partidos políticos coaligados acreditaban que los órganos partidistas competentes aprobaron, de conformidad con sus estatutos, la firma del convenio y la postulación de candidatos de diputados locales al Congreso del Estado en los distritos III, IV, V, VI, VII, XV y XVI.

Ahora no obstante, atendiendo a la exposición del impugnante, que las constancias resultaban eficaces para acreditar que los órganos partidistas competentes determinaron suscribir el convenio de coalición y la postulación de candidatos y cita lo que acompañaron los partidos políticos coaligados, omite señalar las razones por las cuales arribó a la conclusión de que precisamente con unas u otras constancias se acreditaba tal situación; lo que se traduce en una motivación deficiente.

El acuerdo así emitido no satisface la obligación constitucional de la autoridad electoral de motivar

debidamente su actuar, ya que en el mismo no se hizo un análisis de la documentación exhibida a fin de corroborar que los partidos políticos coaligados cumplieron con el requisito que se menciona en la fracción I del artículo 36 del Código Electoral del Estado, pues la simple cita no implica su valoración.

Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia de novena. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXIII, Mayo de 2006; Pág. 1531; que dice:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. *El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción."*

En torno a la violación del principio de exhaustividad, debe decirse que ello obliga al juzgador a decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos por los interesados, de tal forma que el acto de autoridad, resuelva todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate.

En efecto, el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, por tanto, cuando la autoridad dicta su resolución, sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, advertir una resolución incompleta, falta de exhaustividad; precisamente porque la congruencia - externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones, mientras que la exhaustividad implica que la resolución se ocupe de todos los puntos discutibles.

En consecuencia, si la resolución no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad, traducándose en una violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal. - - - -

De acuerdo a su naturaleza la exhaustividad no implica que la autoridad deba llegar al extremo de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el numeral 17 constitucional exige de los tribunales una administración de justicia pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos como el comentado, pues en aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse resoluciones en simetría longitudinal a la de las promociones de las partes, en demérito del estudio y reflexión de otros asuntos donde los

planteamientos verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial para su correcta decisión.

Así pues, debe establecerse que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas.

En razón de lo anterior, el recurrente no puede alegar que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, no hubiere sido exhaustivo en el acuerdo relativo, pues con claridad expuso los motivos por los cuales atendió la pretensión de los partidos políticos coaligados, afirmando que se había cumplido con toda la normatividad para otorgar el registro a la coalición, sin dejar de considerar alguna pretensión del interesado.

Hasta aquí podemos afirmar lo infundado que resulta el motivo de discordia en análisis, pues ha quedado debidamente demostrado que no existe violación al principio de exhaustividad, sino en todo caso, conforme a las expresiones anotadas por el recurrente, técnicamente estaríamos ante una incorrecta valoración de pruebas documentales, pero no de una falta de exhaustividad. - - - -

Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 43/2002 visible en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 51, que reza: -

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.

Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, aun y cuando no existe debida motivación ello no implica que la revisión no haya sido exhaustiva pues analizaron los puntos sometidos a su potestad como lo son los requisitos para otorgar el registro a la coalición de referencia en relación con todos los documentos presentados, por lo que desde esa perspectiva se satisface el principio de exhaustividad, independientemente de la fundamentación y motivación.

Retomando la deficiente motivación; debe quedar definido que dicho agravio es inoperante en virtud de que no obstante que el acuerdo sujeto a revisión adolezca de una adecuada motivación, tal circunstancia es insuficiente para

revocar el mismo ya que la decisión de aprobar el convenio de coalición presentado por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, se encuentra ajustada a la exigencia que marca el artículo 36 fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

En efecto, la norma en comento establece que al convenio de coalición deberán anexarse, entre otros documentos, las actas que acrediten que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos coaligados aprobaron, de conformidad a sus estatutos, **la firma del convenio**, así como la postulación de candidatura para la elección de que se trate, aspectos que son los cuestionados a lo largo del recurso de revisión y son los esenciales para pretender la revocación del acuerdo.

Ahora, de las copias certificadas remitidas por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el once de mayo de dos mil doce, que contiene la totalidad de las constancias del expediente formado con motivo de la solicitud de registro de la coalición por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, se desprende el escrito suscrito por el licenciado Francisco Javier Contreras y Doctor Carlos Joaquín Chacón Calderón, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y Secretario General del Comité Ejecutivo del Partido Verde Ecologista de México, con la finalidad de presentar en tiempo y forma el convenio de coalición para la elección constitucional para el cargo de diputados por el principio de mayoría relativa al Congreso del Estado en los distritos III, IV, V, VI, VII, XV y XVI.

A este escrito, el Secretario del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, licenciado

Mauricio Enrique Guzmán Yañez, hizo constar que se acompañó, entre otros documentos, los siguientes: - - - - -

...

5.- Copia certificada relativa al acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional de fecha 3 de marzo de 2012, expedida ante la fe del licenciado Joel Modesto Esparza, titular de la Notaria Pública número 22, del Partido Judicial de Guanajuato, de fecha 23 de abril de 2012, que consta en una foja útil.

...

8.- Copia certificada relativa al acta de la segunda sesión extraordinaria y urgente de la Comisión Estatal Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional, celebrada en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, en fecha 17 de marzo de 2012, expedida ante la fe del licenciado Joel Modesto Esparza, titular de la Notaria Pública número 22, del Partido Judicial de Guanajuato, de fecha 24 de abril de 2012, que consta de siete fojas útiles, de las cuales seis son solo por el anverso y una por ambos lados

Hasta aquí, podemos identificar esos documentos tendentes a satisfacer lo establecido en la fracción I del mencionado artículo 36 de nuestra ley comicial y que fueron aportados junto con la solicitud de registro del convenio de coalición, por lo que todos los terceros interesados estuvieron potencialmente en posibilidad de conocer esos argumentos y controvertirlos, además de que los mismos le sirvieron y fueron citados en el acuerdo que se combate por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por lo que el impetrante estuvo en posibilidad legal de conocerlos antes de hacer su impugnación.

Ahora bien, previo a analizar de fondo la pretensión del recurrente, se hace necesario relatar la forma en que se conformar las coaliciones, atento a los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, pues no debe perderse de vista que la impugnación se dirige directamente a que este partido político no acompañó las actas para acreditar la mencionada fracción I del artículo 36, omitiendo hacer pronunciamiento en torno al Verde Ecologista de México.

En efecto, las normas estatutarias relativas disponen:

Artículo 7. El Partido podrá constituir frentes, coaliciones y candidaturas comunes con partidos políticos, así como acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales y otras organizaciones en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las constituciones políticas de los Estados de la Federación, al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellas emanan. Para conformarlas en las entidades federativas el Presidente del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal correspondiente solicitará el Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional. En todo lo anterior, el PRI garantizará la equidad de género en cumplimiento pleno a lo ordenado en los artículos 167 y 168 de estos Estatutos.

Artículo 9. Para la formación de coaliciones y candidaturas comunes, acuerdos de participación o cualquier alianza con partidos políticos o agrupaciones políticas cuya aprobación corresponda conforme a los presentes Estatutos a los Consejos Políticos Estatales o del Distrito Federal se observará lo siguiente:

I. Tratándose de elecciones de Gobernador o Jefe de Gobierno, Diputado Local por el principio de mayoría relativa, Ayuntamiento, Diputado a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa y Jefe Delegacional en el Distrito Federal, el Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal que corresponda, previo acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional, deberá presentar la solicitud para formar la coalición o postular la candidatura común ante el Consejo Político respectivo, el cual discutirá y, en su caso, aprobará;

II. Los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal deberán escuchar las opiniones de los consejos políticos municipales o delegacionales cuando la naturaleza de la elección lo requiera;

III. Tratándose de coaliciones para la elección por el principio de representación proporcional, ya sea de Diputado Local o a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Presidente del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal, según corresponda, previo acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional presentará la solicitud directamente ante el Consejo Político respectivo, para su conocimiento y, en su caso, aprobación; y

IV. Para todas las coaliciones, alianzas o candidaturas comunes, concertadas para cargos de elección popular en las entidades federativas, cada Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal actuará de acuerdo con los plazos y procedimientos que determine la ley electoral que corresponda.

Artículo 114. Los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal integrarán, con sus consejeros, las comisiones siguientes:

I. La Comisión Política Permanente;

II. La Comisión de Presupuesto y Fiscalización;

III. La Comisión de Financiamiento; y

IV. Las Comisiones Temáticas y de Dictamen que señale el Reglamento respectivo.

Artículo 116. Las comisiones del Consejo Político Estatal y del Distrito Federal, tendrán las atribuciones siguientes:

I. La Comisión Política Permanente ejercerá las atribuciones del Consejo Político Estatal y del Distrito Federal en situaciones

de urgente y obvia resolución, en los períodos entre una sesión ordinaria y la siguiente, y dará cuenta con la justificación correspondiente al pleno del Consejo Político respectivo de los asuntos que haya acordado...

Artículo 119. *Son atribuciones de los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal:...*

XXV. Conocer y aprobar, en su caso, las propuestas para suscribir frentes, coaliciones, candidaturas comunes, y otras formas de alianza que establezca la ley de la materia, para que, por conducto del Presidente del Comité Directivo de que se trate, se solicite el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional...

De las disposiciones transliteradas se destaca:

a) Respecto de elecciones para diputado local por el principio de mayoría al Congreso del Estado, corresponde al Consejo Político de la entidad federativa respectiva, conocer y aprobar las propuestas para suscribir coaliciones, y que, por conducto del Presidente del Comité Directivo de que se trate, se solicite el acuerdo correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional;

b) El Consejo Político Estatal tiene como facultad integrar entre otras comisiones, la Comisión Política Permanente, la cual podrá ejercer las atribuciones de dicho Consejo en situaciones de urgente y obvia resolución, en los períodos entre una sesión ordinaria y la siguiente, y dará cuenta con la justificación correspondiente al pleno del Consejo Político respectivo de los asuntos que haya acordado.

En esa tesitura, conforme al artículo 119 fracción XXV de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, los Consejos Políticos Estatales tienen como atribución conocer y aprobar, en su caso, las propuestas para suscribir coaliciones, para que, por conducto del Presidente del Comité Directivo de que se trate, se solicite el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional; sin embargo, ello no es obstáculo para estimar que el Partido Revolucionario dio cumplimiento a la mencionada fracción I del artículo 36.

En efecto, de los documentos aportados a la solicitud de registro del convenio de coalición, se desprende un acta

inherente al Partido Revolucionario Institucional, que **demuestra plenamente** que el órgano competente de dicho ente político sí aprobó de conformidad a sus estatutos la firma del convenio, la cual fue aportada en copia certificada notarialmente por el licenciado Joel Modesto Esparza, notario público número 22 en legal ejercicio en el Partido Judicial de Guanajuato, Guanajuato, por lo que la misma debe considerarse como documental pública y auténtica de su original, en razón de lo cual tiene valor probatorio pleno al tenor del establecido en el artículo 320 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

En efecto, de la referida copia certificada del acta de la II sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día diecisiete de marzo del dos mil doce por la Comisión Estatal Política Permanente, del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, se deriva que, entre otros puntos, aquélla Comisión Política aprobó la firma del convenio de coalición entre su partido con el Partido Verde Ecologista de México, para contender en diversos municipios del Estado en las elecciones constitucionales de este año, según se aprecia de la siguiente transcripción de la parte conducente a las citadas determinaciones:

*En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, en el auditorio “Luis Donaldo Colosio”, sito en Paseo de la Presa No. 37, el día 17 diecisiete de marzo del año 2012 dos mil doce; siendo las 12:20 doce horas con veinte minutos, se celebra la Sesión II extraordinaria y urgente de la Comisión Política Permanente...
... se declara la existencia de quórum legal, y se declara formalmente instalada la II Sesión Extraordinaria Urgente de la Comisión Estatal Política Permanente y en consecuencia serán válidos los acuerdos que de esta sesión emanen...*

*...
Para efectos de información y aclaración de cualquier duda, por haberse convocado con carácter de urgencia a la celebración de esta Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente, el Secretario Técnico expone los argumentos que*

justifican la urgencia, anexando a la presente el documento explicativo correspondiente (Anexo dos)

...

Conforme al orden del día corresponde y con el antecedente de la autorización otorgada primeramente por el Consejo Político Estatal y posteriormente por esta Comisión Estatal Política Permanente el pasado 05 de marzo del año en curso, al Presidente del Comité Directivo Estatal, Ingeniero José Luis Uribe y una vez que se han acordado los términos para la celebración de los **convenios de coalición respectivos del Partido Revolucionario Institucional con el Partido Verde Ecologista de México,** procede someter a consideración de los integrantes de la Comisión Estatal Política Permanente la aprobación para la respectiva suscripción y registro ante el Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato, de los referidos convenios tanto para la elección de Gobernador del Estado, Diputados por el principio de Mayoría Relativa y Ayuntamientos, mencionándose de que en virtud de que los mismos estuvieron a la consulta de los consejeros, se dispense la lectura de los mismos y referir solo lo relevante en su discusión, aprobado lo anterior, el Secretario Técnico Diputado Licenciado José Isaac González Claderón informo a la Asamblea la generalidad de los términos acordados del **convenio de coalición entre el Partido Revolucionario Institucional –Partido Verde Ecologista de México, para la elección de Gobernador del Estado,** por tanto están listos y solo a la espera del resultado de la asamblea electiva respectiva a desarrollarse el día de mañana 18 de marzo para designar a nuestro candidato, al concluir la exposición sobre términos y alcances del convenio y sin intervenciones de los consejeros políticos estatales en relación al contenido de este convenio y **sometido a la consideración de los presentes en votación económica, fue aprobado por mayoría, en lo general; al ponerlo a consideración de la asamblea en lo particular el mismo también se aprueba por mayoría de los presentes; por lo que se autoriza al Presidente del Comité Directivo Estatal a la firma del mismo y en su caso el registro correspondiente.-** Se adjunta el acta como parte de la misma el convenio correspondiente. (Anexo cuatro). ---

A continuación el Secretario Técnico informa a la Comisión Política Permanente que lo que se refiere al **convenio de coalición Partido Revolucionario Institucional – Partido Verde Ecologista de México, en relación a los distritos locales,** para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa lo informa el Presidente Ingeniero José Luis González Uribe, quien en uso de la voz refiere y expone los términos y aspectos relevantes del convenio correspondiente donde las partes acuerdan que los candidatos que postulará la Coalición al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa será en los **distritos III, IV, V, VI, VII, XV y XVI** y tendrán origen y pertenecerán, de resultar electo en el proceso electoral, al correspondiente Grupo Parlamentario, conforme a lo siguiente:

DISTRITO	PARTIDO DE ORIGEN	GRUPO PARLAMENTARIO
----------	-------------------	---------------------

III	PRI	PRI
IV	PRI	PRI
V	PRI	PRI
VI	PRI	PRI
VII	PVEM	PVEM
XV	PVEM	PVEM
XVI	PRI	PRI

Concluida la intervención del Presidente, el Secretario Técnico pregunta a los integrantes de la Comisión Estatal Política Permanente si hay comentarios y en uso de la voz el consejero **Rigoberto Paredes Villagomez** solicita que en la realización de estos convenios de coalición se requiere un análisis más profundo a efecto de no lastimar a nadie de la militancia con la celebración de los mismos en los distritos señalados; la secretaría técnica le informa que en este caso se habla solo de distritos en los que aún no hay candidatos y que sus comentarios son razonables, sin embargo hay que considerar la urgencia de ya dejar aprobada la autorización por parte de la Comisión Política Permanente, para la formalización ante la autoridad electoral de estos convenios, en razón de que en esta fecha hace lo propio el Partido Verde Ecologista de México y los plazos de registro de la plataforma electoral y los convenios apremian y es importante tomar providencias por las razones que obligaron a la urgencia de esta sesión. No habiendo más intervenciones al respecto y en los términos expuestos por la presidencia de esta Comisión Política Permanente, sin más discusiones y con la información proporcionada **el Secretario Técnico somete en lo general a la consideración de los consejeros comisionados y en votación económica el convenio de coalición referido a los distritos electorales enunciados, lo anterior fue aprobado por mayoría de los integrantes de la Comisión Política; al ponerlo a votación en lo particular sin más intervenciones en votación económica se aprueba la propuesta por mayoría de los presentes comisionados; por lo que se autoriza al Presidente del Comité Directivo Estatal a la firma del mismo en sus términos.** Se adjunta al acta como parte de la misma el convenio correspondiente. (Anexo cinco).-

La documental reseñada pone de manifiesto que los partidos políticos coaligados sí exhibieron ante la autoridad responsable el acta que acredita que los órganos competentes del Partido Revolucionario Institucional aprobaron, de conformidad con sus estatutos, la firma del convenio de coalición, no sólo en lo general, sino concretamente en relación con los distritos locales para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa al Congreso del Estado, según ha quedado asentado.

Se sostiene lo anterior, en atención a que la Comisión Estatal Política Permanente, del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, conforme al ordinal 116 fracción I de los Estatutos del citado instituto político, tiene facultades de ejercer las atribuciones del Consejo Político Estatal en situaciones de urgente y obvia resolución, por lo que estaba facultada para emitir la aprobación de la coalición, por ser acorde a sus estatutos.

De manera que fue el Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Guanajuato, a través de la Comisión Política Permanente, el órgano partidista que aprobó la propuesta del convenio de coalición con el Partido Verde Ecologista de México, por lo que es claro que tal aprobación se hizo acorde con la normativa interna de ese instituto político, ya que tiene competencia para asumir tal determinación.

En razón de lo anterior, es **infundada** la aseveración del recurrente al pretender demostrar que a la solicitud de registro de convenio de coalición sólo se acompañó el oficio signado el tres de marzo de dos mil once por Pedro Joaquín Codwell y María Cristina Díaz Salazar, pues ello es parcialmente cierto, ya que no sólo se arrimó al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, ese documento, sino además como se viene exponiendo a lo largo de esta resolución, también se anexó copia certificada notarialmente del acta de la asamblea celebrada el diecisiete de marzo de dos mil doce, donde obra la aprobación conforme a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional la firma del convenio de coalición, cuyo documento tiene valor probatorio pleno, según ya quedó asentado.

En razón de lo anterior, basta con acompañar al convenio de coalición, el acta con la que se acreditara que el

órgano partidista competente aprobó de conformidad a sus estatutos la firma del convenio relativo, para estimar colmada la fracción I del artículo 36 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Máxime que las autorizaciones que en favor del Presidente del Comité Directivo Estatal haya otorgado el Consejo Político Estatal y/o la Comisión Política Permanente, ambos del Partido Revolucionario Institucional, para sostener pláticas de coalición y celebrar convenios de esa naturaleza, en nada afectan la procedibilidad del registro del convenio de coalición, pues lo que exige la normativa electoral es que se demuestre a la autoridad administrativa que la aprobación del convenio respectivo fue realizada por los órganos partidarios competentes para ello.

De tal manera, se puede afirmar que el Partido Revolucionario Institucional **si** aportó con el convenio de coalición el acta levantada con motivo de la II sesión extraordinaria y urgente del diecisiete de marzo del dos mil doce, dentro de la cual la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, aprobó la firma del convenio.

II.- Carece de razón el disidente al pretender interpretar la fracción I del artículo 36 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en el sentido de que el Partido Revolucionario Institucional debió aportar el acta del Consejo Político Nacional donde se autorizó al Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato a celebrar convenios de Coalición con uno o más partidos políticos para el proceso electoral 2012, en los términos que establecen los estatutos y la legislación local.

A este respecto conviene recordar que el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, es taxativo

en indicar que el Poder Público únicamente puede lo que la Ley le concede y el gobernado todo lo que ésta no le prohíbe, por lo que la actuación del Estado hacía los gobernados no puede ser caprichosa o arbitraria, sino debe estar sustentada en los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

Es incuestionable que al presentar la solicitud de registro del convenio de coalición que nos ocupa, se acompañó entre otros documentos la copia certificada notarialmente del oficio de fecha tres de marzo de dos mil doce signado por el senador Pedro Joaquin Coldwell y la diputada María Cristina Díaz Salazar, en el que solamente se encuentra la transcripción de un acuerdo en el que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional autoriza al Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato a celebrar convenios de coalición, sin que se haya acompañado, copia certificada del acuerdo donde consta esa autorización del Consejo Político Nacional.

Sin embargo, conforme a la literalidad de la fracción I del artículo 36 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, no se desprende que exista obligación de los partidos políticos coaligados, en el sentido de que deban de presentar **todas las actas** previas a la obtención de la aprobación de la firma del convenio.

En efecto, esta disposición textualmente reza:

ARTÍCULO 36.- *Al convenio de coalición deberán anexarse los siguientes documentos:*

I.- Las actas que acrediten que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos coaligados aprobaron de conformidad a sus estatutos la firma del convenio, así como la postulación de candidatura para la elección de que se trate;

Conforme a una interpretación de índole gramatical, puede afirmarse que el numeral 36 en cita, solo exige que al convenio de coalición se anexe, entre otros documentos las

actas que acrediten que los órganos partidistas de cada uno de los partidos coaligados **aprobaron de conformidad a sus estatutos la firma del convenio**, no así las actas anteriores y necesarias para estar en legal aptitud de aprobar la referida firma del convenio.

Es indudable que el Partido Revolucionario Institucional conforme al artículo 9 de sus estatutos, tratándose de elecciones de Diputado Local por el principio de mayoría relativa, el Comité Directivo Estatal, previo acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional, debe presentar la solicitud para formar la coalición o postular la candidatura común ante el Consejo Político respectivo, en la cual se discutirá y, en su caso, aprobará; sin embargo, ello no se traduce en que el Partido Político en mención tuviera la obligación de acompañar el acta del acuerdo emanado por el Consejo Político Nacional, pues como se viene exponiendo, la fracción I del artículo 36 sólo exige que se acompañen, **únicamente** las actas que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos coaligados aprobaron de conformidad con sus estatutos la firma del convenio, siendo que en el presente caso, ello está satisfecho con la copia certificada del acta de la II sesión extraordinaria urgente de fecha diecisiete de marzo de dos mil doce, referenciada línea arriba.

Por lo anterior, es suficiente para tener por acreditado que la firma del convenio de coalición se llevó a cabo, satisfaciendo los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, pues acompañó la copia certificada del oficio de tres de marzo de dos mil doce, en el que se comunicó el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional en el que se autoriza al Comité Directivo de Partido Revolucionario Institucional en Guanajuato a celebrar convenios de coalición con uno o más partidos políticos para el proceso electoral 2012, pues la

misma tiene valor probatorio pleno en los términos establecidos en el artículo 320 de la ley comicial y demuestra que la autorización de la firma del convenio de coalición fue hecha al tenor de lo referidos estatutos.

Además de que lo anterior, es congruente con la atribución otorgada al Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de comunicar a quien corresponda los acuerdos de dicho Comité y del Presidente, según se infiere de la fracción VII del artículo 89 de los mencionados estatutos del Partido Revolucionario Institucional.

Por lo expuesto, resulta **infundada** la pretensión del disidente al pretender que se acompañara la copia certificada del acta donde el Comité Ejecutivo Nacional acordó la celebración de convenios de coalición con uno o más partidos políticos, pues se reitera, es suficiente con el oficio signado por la Secretaria General y Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, además que ello no lo exige la fracción I del artículo 36 de nuestra ley comicial; por tanto no puede estimarse inobservado dicho precepto por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

En conclusión, la fracción I del artículo 36 de la ley comicial local, no exige que se adjunten todas las actas que se realicen durante el procedimiento intrapartidista para obtener la aprobación del convenio; sino únicamente aquéllas que acrediten que los órganos partidistas respectivos aprobaron, de conformidad a sus estatutos, la suscripción del convenio de coalición.

III.- Resultan **infundados** e inoperantes los agravios relativos a que la indebida fundamentación y motivación para determinar satisfechos los extremos del artículo 36 fracción I del código electoral se trastocan por parte del Consejo

General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se traduce en una violación a los principios de legalidad, objetividad, certeza y equidad que la autoridad administrativa de esta materia debe observar en todas y cada una de las resoluciones que emita, por las razones que enseguida se exponen.

Cierto es que la expresión de agravios puede tenerse por formulada independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, así como del escrito de su presentación, estructura o construcción lógica, ya sea como silogismo o utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que los medios de impugnación en materia electoral no son un procedimiento formulario o solemne.

Sin embargo, como requisito indispensable, los agravios deben expresar con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que ocasiona el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que con el argumento expuesto, dirigido a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad en el proceder de la autoridad responsable, el órgano jurisdiccional se ocupe de su estudio con base en los preceptos jurídicos aplicables.

En la especie, el recurrente se duele que el acuerdo impugnado transgrede el principio de certeza, rector del actuar de la autoridad electoral, dado que los partidos coaligantes presentaron diversa información para acreditar sus actos internos, y con base en ellos la autoridad aprobó el convenio sometido a su consideración.

Empero, no expone de manera clara por qué el acuerdo combatido vulnera el principio de certeza, ya que este principio entraña el más alto grado de confiabilidad en una persona, en un proceso o en una institución, ya que quien la posee se convierte en un parámetro de referencia obligada en

determinada situación; así la certeza denota un funcionamiento eficaz, refiere calidad en los procesos que una institución lleva a cabo, y por tanto imprime, desde su origen, confiabilidad en el cumplimiento de sus funciones.

En esa tesitura, no puede considerarse que la autoridad administrativa electoral se haya apartado del principio de certeza que debe regir su actuar, solo por el hecho de que haya realizado de manera deficiente la motivación del acuerdo recurrido; pues ello no implica que su actividad haya dejado de tener certidumbre.

De igual forma no le asiste la razón al recurrente al aseverar que se transgredió el principio de equidad, bajo el argumento de que la autoridad responsable al momento de declarar la procedencia del registro de la coalición no analizó de manera esmerada cada una de las probanzas presentadas por los dos partidos políticos que conforman la coalición cuyo registro impugna.

Este principio estriba en que la autoridad administrativa electoral debe tener un trato equilibrado entre los distintos partidos políticos que confluyen ante él, sin que el disidente exponga por qué considera que existe un trato desigual hacia el partido político que representa, pues el hecho de que no se haya motivado suficientemente la aprobación del convenio de coalición, no implica ni tampoco demuestra un trato diferente hacia los partidos políticos que conforman el consorcio político.

Respecto al argumento impugnativo relativo a que la falta de objetividad de la autoridad responsable deviene de la desatención de los elementos presentados como evidencia de la vulneración de principios electorales, porque sin entrar al estudio adecuado calificó como idóneas las documentales ofrecidas por los coaligantes, a pesar de que considera que

aquella tiene facultades para verificar las normas estatutarias, resulta infundado, por lo siguiente:

La insuficiente motivación del acuerdo recurrido no significa que el órgano electoral no haya estudiado y analizado tanto la documental como la norma estatutaria de cada uno de los partidos políticos, sino únicamente implica que omitió plasmar en dicho acuerdo las explicaciones suficientes por las cuales consideró demostrada la aprobación del convenio de coalición que se sometió a su consideración.

Por ello, la deficiente motivación no conlleva necesariamente la falta de objetividad de la autoridad responsable, pues dicho principio electoral obliga a analizar los hechos por encima de la opinión personal.

Así, la objetividad consiste en el ejercicio inevitable de autenticidad permanente, que exige desterrar la mala fe y reducir al mínimo la posibilidad de error, esto es, la objetividad es el sustento de la imparcialidad ya que en el proceso de reconstrucción lógica de la realidad, la segunda sin la primera es imposible.

En relación a la falta de exhaustividad de que se queja el disidente, debe decirse que ésta es una consecuencia necesaria de la congruencia y la motivación. Un acto de autoridad es exhaustivo en la medida en que haya tratado todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados con base en los lineamientos legales, sin dejar de considerar ninguna, es decir, el órgano electoral al resolver la procedencia de las peticiones debe agotar todos los puntos aducidos y referirse a todas y cada una de las pruebas rendidas.

En este orden de ideas, solo puede considerarse que un acuerdo adolece de exhaustividad cuando deje de referirse a algún punto, argumentación o prueba, esto es, las

resoluciones son exhaustivas cuando se examinan todos los puntos relativos a las afirmaciones y argumentaciones de las partes y a las pruebas rendidas, lo que evidencia que aunque en lo general, al inicio de la exposición se hubiere calificado de fundado su motivo de discordia, resulte inoperante, pues aunque el acuerdo impugnado esta deficientemente motivado, ello no implica que deba revocarse dicha resolución, pues existen motivos y pruebas para sostener la legalidad del acuerdo para tener por registrado el convenio de coalición.

Finalmente, en cuanto al principio de legalidad que también estima transgredido el disidente, cabe referir que en la materia electoral las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales no escapan de la obligación constitucional de ajustarse al mismo.

En efecto, el primer párrafo del artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, dispone que el Poder Público únicamente puede lo que la Ley le concede y el gobernado todo lo que ésta no le prohíbe.

Para el caso concreto, el principio de legalidad en la materia electoral, significa que las actividades del Estado, los partidos políticos y los ciudadanos deberán apegarse en todo momento a la Constitución Federal y local y al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a las demás leyes aplicables en materia electoral o de la administración pública.

En esencia, consiste en que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la las disposiciones constitucionales y legales aplicables, a fin de dotar de certeza jurídica su actuar, tal y como se desprende de la tesis de jurisprudencia visible en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, suplemento 5, año 2002, páginas 24 y 25, misma que enseguida se translitera:

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. *De conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.*

En conclusión, luego del análisis de fondo, la deficiente motivación del acto reclamado no implica *per se* la vulneración al principio de legalidad, pues en dicho acuerdo se atendió, por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el marco normativo aplicable al caso concreto, esto es, las diversas disposiciones tanto de la Constitución Política local, como del código electoral del Estado, por lo que el agravio analizado debe calificarse de **infundado**.

Por todo lo expuesto, se **confirma** el acuerdo CG/054/2012 dictado el treinta de abril de dos mil doce, por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 286, 287, 298, fracción IV, 299, 300, 301, 308, 327 y 328 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se:

RESUELVE:

PRIMERO.- Esta Sala resultó competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión.

SEGUNDO.- Se **confirma** el acuerdo número CG/054/2012 dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en fecha treinta de abril del año en curso, mediante el cual se autorizó el registro del Convenio de Coalición suscrito por los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, para postular candidatos a diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa en los distritos III, IV, IV, V, VI, VII, XV, y XVI del Estado de Guanajuato.

TERCERO.- Notifíquese personalmente al recurrente Partido Acción Nacional; por oficio a la autoridad señalada como responsable Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y a los terceros interesados la coalición “*COMPROMISO POR GUANAJUATO*” conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, en sus domicilios proporcionados para tal efecto; así como por estrados, a cualquier otro tercero que pudiera tener interés dentro del presente asunto, anexándose en todos los supuestos copia certificada de la presente resolución.

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado **Héctor René García Ruiz**, Magistrado Propietario que integra la Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, que actúa legalmente con Secretario, Licenciado **José Israel Martínez Vidal.- Doy Fe.**

Dos Firmas Ilegibles. Firmados.- Doy Fe. - - - - -